TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA CUARTA CIVIL – FAMILIA

Barranquilla, Diciembre Primero (1º) de Dos Mil Veintidós (2022).-

Procede la Magistrada Sustanciadora de la Sala Cuarta Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 08 de junio de 2022, proferido por el JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.-

A N T E C E D E N T E S

Se tiene el presente proceso Ejecutivo promovido por la sociedad VEBA S.A. EN LIQUIDACIÓN en contra de los señores SOCIEDADES I.P.S. LEVPHARMA DE COLOMBIA, KEVIN BRANDSON RODRÍGUEZ EVERTZS, LEAPS INVESTMENT VENTURES INC S.A.S., LUIS ERNESTO VELÁSQUEZ LÓPEZ y CLARETH JOSÉ MUNIVE MEEK, cursante en el JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad.-

Ante lo anterior, el despacho el 30 de enero de 2019 libró mandamiento de pago a favor de la SOCIEDAD VEBA S.A. EN LIQUIDACIÓN en contra de los señores SOCIEDADES I.P.S. LEVPHARMA DE COLOMBIA, KEVIN BRANDSON RODRÍGUEZ EVERTZS, LEAPS INVESTMENT VENTURES INC S.A.S., LUIS ERNESTO VELÁSQUEZ LÓPEZ Y CLARETH JOSÉ MUNIVE MEEK.-

Consecutivamente, en calenda de 08 de junio de 2022, el despacho ordenó denegar la orden de ejecución implorada por la parte demandante por ausencia del cumplimiento de rigores dentro del título ejecutivo adosado.-

Frente a lo anterior, la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, la cual fue resuelta mediante auto de 01 de agosto de 2022, por la Juez A-quo, manteniéndose dicha decisión y concediendo la alzada vertical de rigor, la cual correspondió a esta Colegiatura, la cual procederá a su resolución previo al pronunciamiento de las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

El legislador dentro de la normativo procesal, consagró los recursos ordinarios como herramientas jurídicas para ser utilizadas por los litigantes cuando quieran que no compartan las decisiones que en los respectivos procesos profieran los funcionarios Judiciales, verbigracia de lo anterior se refleja a través del recurso de apelación que es establecido como una herramienta procesal estrechamente vinculada con el principio de las dos instancias y se reconoce a quien en el proceso obtiene decisión desfavorable a sus intereses, con el fin de que el superior jerárquico de quien emitió

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-001-31-53-016-2018-00293-01.-
RADICACIÓN INTERNA: 44.269.-

la providencia revise y corrija los posibles yerros fundados por el A-quo, lo anterior en concordancia a los reparos y argumentos fundados por el recurrente.-

Dentro de los argumentos oponibles suscitados por el recurrente frente a la providencia emitida, primariamente el mismo funda su discrepancia frente al argumento sentenciado por la censora de primer grado, de revisar nuevamente los requisitos legales del título ejecutivo tal como se establece dentro de lo dispuesto dentro del artículo 430 del C.G.P, los cuales solo podrán ser dilucidados mediante recurso de reposición. Igualmente expone que los argumentos que exigen la presentación del contrato de arrendamiento con acotación de ser primera copia original, no es de recibo ya que tales formalismos no cuentan con resguardo dentro de la normativa imperante.-

Frente al primer cargo, es menester que tales argumentos que pretenden vedar al director de juicio de revisar cualquier tipo de irregularidad dentro de los cimientos y actuaciones contentivas dentro del proceso ejecutivo, ciertamente han sido objeto de controversia dentro de los estrados judiciales; no obstante tales discusiones son zanjadas al confrontarse dentro de la aplicación de los principios generales de nuestra norma procesal que inmiscuyen el deber riguroso del operador judicial y la seguridad jurídica dentro de la impartición de justicia.-

Por ser pertinente, se trae a colación la sentencia STC3298-2019, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, en la cual se expuso:

"(...) [R]elativamente a específicos asuntos como el auscultado, al contrario de lo argüido por la (...) quejosa, sí es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisión del «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia (...)".

"(...)".

"Y es que sobre el particular de la revisión oficiosa del título ejecutivo esta Sala precisó, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente:

"Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restringida derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (...)".

"Entre ellas, y en lo que atañe con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta ante la jurisdicción en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del Código General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que «[l]os

requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso», lo cierto es que ese fragmento también debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejúsdem, amén del mandato constitucional enantes aludido (...)".

"Por ende, mal puede olvidarse que así como el legislador estipuló lo ut supra preceptuado, asimismo en la última de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determinó que «[p]resentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal» (...)".

"De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañadero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez a quo, ora por el ad quem (...)".

"Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregonó en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el Código de Procedimiento Civil, lo cual ahora también hace en punto de las reglas del Código General del Proceso, para así reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino más bien se convierte en un «deber» para que se logre «la igualdad real de las partes» (artículos 4º y 42-2º del Código General del Proceso) y «la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial» (artículo 11º ibidem) (...)".

"Ese entendido hace arribar a la convicción de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartición de justicia material. Por tanto, así la cita jurisprudencial que a continuación se transcribe haya sido proferida bajo el derogado Código de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del Código General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitación alguna, [...] sí está habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el título que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jurídicas de aquel no fueron cuestionadas, como también a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo atañadero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer tópico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar ex limitación o desafuero en sus funciones, máxime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 Superior) (...)".

"(...)".

"En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (...), dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, «en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (...) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que "la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal (...)".

"De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (...)".

"Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago, cerrándole a ésta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través de excepciones de fondo, en aras de propender por la economía procesal, entendido tal que lejos está de erigirse en la prohibición que incorrectamente vislumbró el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no podía, motu proprio y con base en las facultades de dirección del proceso de que está dotado, volver a revisar, según le atañe, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto sería colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adoptó fue la ilógica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrección, ello no podía ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primacía del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicación en la estructura del ordenamiento jurídico al efecto constituido (...)".¹

Bajo ese entendido, resulta claras las calidades oficiosas que revisten al operador judicial dentro del despliegue del escenario ejecutivo para el estudio del mentado título de recaudo, lo anterior en aras de garantizar la correcta impartición de justicia y efectuar los controles debidos dentro del devenir judicial, disposiciones que en efecto armonizan con los deberes intrínsecos del director de contienda dentro de los principios procesales.-

Por lo que, en tal entendido, la juzgadora de primera instancia estaba revestida en cualquier momento y etapa procesal por disposiciones normativas de revisar cualquier elemento que pudiera conjurar una irregularidad procesal, inclusive dentro de los formalismos que erigen los títulos cuyo recaudo que se pretenden, por lo que el cargo emitido por el memorialista no encuentra vocación prosperidad.-

¹ CSJ. STC4808 de de abril de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-00694-00, reiterada en STC4053 de 22 de marzo de 2018, exp. 68001-22-13-000-2018-00044-01

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-001-31-53-016-2018-00293-01.-
RADICACIÓN INTERNA: 44.269.-

Frente al segundo cargo que pretende manifestar su disenso frente a la exigencia de la primera copia del contrato de arrendamiento, se destaca que esta Sala ciertamente discrepa de la posición aprehendida por la juzgadora, toda vez que el rigorismo formal de exhibir la primera copia del contrato de arrendamiento no confluye dentro de las disposiciones establecidas dentro de nuestra legislación comercial.-

En efecto tales rigorismos resultan desatinados pues tales exigencias no están contempladas dentro de nuestro estatuto para el perfeccionamiento del negocio jurídico planteado, pues solo bastara la rúbrica de los contratantes y la entrega del inmueble para la consumación del mismo.-

En dicho sentido, el artículo 422 del Código General del Proceso consagra que:

"Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley."

De ese modo es de advertir que el contrato de arrendamiento de local comercial, cumple con las exigencias dispuestas en el artículo antes citado ya que es un acuerdo entre las partes, en el cual las disposiciones mentadas se evidencia un precio de canon, plazo, las obligaciones de las partes y demás cláusulas que son necesarias y con los condicionamientos establecidos disposiciones que en efecto guardan analogía con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 820 de 2003 a los arriendos comerciales, disposición que faculta al ejecutante a la persecución de los rubros adeudados sin perjuicio de las presunciones consonantes dentro del artículo 244 del C.G.P.-

Por lo que no cabe duda para esta Sala que las obligaciones contentivas dentro del mencionado contrato, la cual buscan a través de la línea procesal invocada la ejecución de los cánones de arriendo impagos, por lo que la exigencia de rigores que escapan de las disposiciones procesales no son de recibos para esta Colegiatura, toda vez que como indicó el recurrente las exigencias de primera copia se ciñen para los casos dentro de las garantías elevadas a escritura pública, supuestos que en efecto difieren los escenarios de tenencia.-

En consecuencia, esta Magistratura procederá apartarse del criterio aprehendido por la juez A-quo y se dispondrá a revocar el proveído impugnado y en consecuencia se ordenara dejar sin efectos la providencia mentada y proceder a pronunciarse nuevamente frente a la solicitud de seguir adelante la ejecución, presentada por la parte demandante.-

CÓDIGO ÚNICO DE RADICACIÓN: 08-001-31-53-016-2018-00293-01.-
RADICACIÓN INTERNA: 44.269.-

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora de la Sala Cuarta Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 08 de junio de 2022 proferido por el JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA por los motivos anotados y en consecuencia pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de seguir adelante la ejecución, presentada por la parte demandante.-

SEGUNDO: Sin condena en costas.-

TERCERO: Ejecutoriado este proveído, no existiendo expediente físico que devolver a la Juez A-quo, por la Secretaría de esta Sala, remítase un ejemplar de la presente providencia al correo electrónico del Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de esta ciudad, y póngase a disposición lo actuado por esta Corporación.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARMIÑA GONZÁLEZ ORTIZ
Magistrada Sustanciadora

Firmado Por:

Carmiña Elena Gonzalez Ortiz

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 6 Civil Familia

Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cc0c16e17663811f3c3d2f5e9c7be5485ca53d5755af62c4d5f7bab58dfa998f**

Documento generado en 01/12/2022 12:25:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>